

Bogotá D.C., 21 de noviembre de 2024

Doctores

H.R. Jaime Rodríguez
H.R. José Octavio Cardona
H.R. Sandra Milena Ramírez
H.R. Nicolás Antonio Barguil
H.R. Leyla Marleny Rincón
H.R. Jorge Andrés Cancimance
H.R. Teresa de Jesús Henríquez
H.R. Gabriel Ernesto Parrado
H.R. Olga Beatriz González
H.R. Ermes Evelio Pete
H.R. Héctor Mauricio Cuéllar
H.R. Julio Roberto Salazar

H.R. Flora Perdomo
H.R. Erick Adrián Velasco
H.R. Oscar Leonardo Villamizar
H.R. Diego Patiño Amariles
H.R. Julia Miranda
H.R. Cristian Danilo Avendaño
H.R. Ana Rogelia Monsalve
H.R. Luis Ramiro Ricardo
H.R. Leonor María Palencia
H.R. Juan Pablo Salazar
H.R. Edinson Vladimir Olaya
Dr. Camilo Ernesto Romero

Honorables Representantes
Cámara de Representantes
Ciudad

Ref.: Comentarios sobre el Proyecto de Ley 458 de 2024 -
Cámara – 021 de 2023 Senado

Honorables Representantes,

Para la Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL como gremio que vela por los intereses de quienes forman parte de la cadena de valor de la construcción en pro de liderar el desarrollo urbano responsable y sostenible, es muy importante acompañar al Congreso de la República en las iniciativas legislativas que definan estrategias efectivas a fin de prevenir acciones nocivas contra el medio ambiente, así como para mitigar los efectos del cambio climático. Es por ello que, en el marco de la gestión que adelanta Camacol, nos permitimos presentar las siguientes observaciones frente al proyecto de ley de la referencia:

1. De la necesidad de mantener la estructura institucional y reglamentario existente frente a los Residuos de Construcción y Demolición - RCD

El objeto, contenido y alcance de la norma propuesta pretenden abarcar la totalidad de los residuos sólidos, incluidos aquellos provenientes de la construcción y demolición, conocidos como Residuos de Construcción y Demolición (en adelante RCD).

Al respecto, vale la pena tener en cuenta, que en Colombia la gestión integral de los RCD dadas sus particularidades, tiene una reglamentación especial contenida en la Resolución 0472 de 2017 (modificada por la Resolución 1257 de 2021) expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), que define las actividades para su gestión integral; el programa de manejo ambiental que deben formular, implementar y mantener actualizado los grandes generadores con el objetivo de cumplir las metas de aprovechamiento establecidas según la categoría de los municipios; el andamiaje institucional y el ámbito de las competencias y obligaciones de los diferentes actores tanto públicos como privados que intervienen en el proceso (generadores, gestores, municipios, autoridades ambientales competentes).

La incorporación de los RCD en la iniciativa legislativa sin tener en cuenta el marco normativo antes señalado y sin contemplar un régimen diferenciado para este tipo de residuos, además de ocasionar una transformación sustancial en el diseño institucional, las competencias asignadas y, en la reglamentación y regulación que hasta la fecha ha regido la gestión de esta clase de residuos; desconocería las acciones y esfuerzos que tanto los generadores como los municipios han venido adelantando para el cumplimiento de las metas definidas. Ante la ausencia en el proyecto de ley de la referencia de una norma que, por su especificidad temática, garantice la preservación de la regulación particular de los RCD, existiría el riesgo de generar superposiciones normativas y confusiones en su aplicación, como a continuación se evidenciará:

La gestión de los RCD en Colombia se ha desarrollado históricamente bajo el marco normativo de las leyes ambientales y de servicios públicos. Hasta ahora, su regulación ha recaído principalmente en resoluciones expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las cuales, como se mencionó, han establecido lineamientos técnicos específicos para su manejo. En la actualidad, la gestión de estos residuos se rige por las Resolución 0472 de 2017 modificada por la Resolución 1257 de 2021 expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).

De este modo, es necesario hacer hincapié en que actualmente se encuentra en desarrollo el módulo sobre información de la gestión integral de RCD en la plataforma SIAC (Sistema de Información Ambiental para Colombia) en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; el cual se considera fundamental para mejorar el manejo de los RCD en el país, promoviendo una gestión más eficiente y transparente de los residuos generados en el sector de la construcción. Al respecto, en el artículo 23 de la iniciativa legislativa se propone la creación del Sistema de Información Nacional de la Gestión Integral de Residuos Sólidos — SINGIRS frente al cual se sugiere una articulación con el desarrollo del módulo anteriormente enunciado. Además, del funcionamiento del reporte a través de las autoridades ambientales competentes que hoy se viene realizando, cuyo desconocimiento implicaría un retroceso en la gestión de los RCD.

No obstante, lo anterior, el proyecto de ley radica la competencia administrativa como ente rector de la política nacional de gestión integral de residuos sólidos y regulador de esta actividad, en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Así lo deja ver el artículo 5¹ del proyecto, en general la totalidad del texto y en particular el artículo 57² que define que dicho Ministerio será el responsable de reglamentar la cadena de este tipo de

¹ **“Artículo 5. La gestión integral de residuos sólidos en el gobierno nacional.** El ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es la entidad rectora de la política nacional de la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos, de acuerdo con lo establecido en la presente ley. Las políticas, planes, programas, desarrollos normativos y regulatorios que expida el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, deberán incluir el análisis y las medidas necesarias para asegurar la articulación y eficiencia desde la perspectiva del servicio público de aseo y las demás corrientes de residuos, a partir de los diferentes sistemas de recolección y transporte, buscando reducir el impacto económico en la población y cumplir metas nacionales asociadas a la gestión integral de residuos sólidos, incluyendo el impulso a la comercialización de materiales y subproductos resultados del aprovechamiento y tratamiento”

² **“Artículo 57. De los residuos de construcción y demolición -RCD.** El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es el responsable de reglamentar la generación, recolección, cargue, transporte, disposición, almacenamiento temporal o permanentemente y/o aprovechamiento de

residuos. Este ajuste de competencias deja en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solamente lo relativo a los residuos peligrosos, excluidos de la nueva asignación de competencias hecha por el artículo 5 mencionado.

La implementación de los ajustes institucionales y normativos propuestos por el proyecto de ley implicaría no sólo la expedición de actos reglamentarios y regulatorios que se alineen con la nueva asignación de competencias, sino además la estructuración y puesta en marcha de todo el sistema de reporte y control que hoy se encuentra en ejecución frente a la gestión de los RCD.

De esta forma, resulta fundamental contar con un análisis que permita evidenciar tanto los resultados deseados como los impactos probables positivos y negativos que se generan como consecuencia de la propuesta de transferir la rectoría y reglamentación de esta materia al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; así como de mantener la reglamentación que en la actualidad reglamenta la gestión de RCD.

2. Riesgos en el rol de las autoridades ambientales regionales sobre la estructuración y financiación de planes y proyectos de gestión integral de residuos sólidos

El proyecto de ley introduce nuevas disposiciones que asignan a las autoridades ambientales regionales, metropolitanas y urbanas un rol activo en la estructuración y financiación de planes y proyectos de gestión integral de residuos sólidos sin perjuicio de sus demás competencias frente a esta temática. En particular, el artículo 10 establece:

"Artículo 10. De las autoridades ambientales regionales, metropolitanas y urbanas. Las autoridades ambientales regionales, metropolitanas y urbanas deberán apoyar la estructuración y financiación de planes y proyectos de gestión integral de residuos sólidos para asegurar la defensa y protección del medio ambiente y recursos naturales en el área de su jurisdicción; sin perjuicio de las demás competencias de los municipios y distritos frente a las diferentes corrientes de residuos."

Al respecto, el proyecto de ley determina que quienes presten el servicio público de aseo o quienes gestionen residuos, deberán obtener los permisos, licencias y demás autorizaciones que requieran, conforme la normatividad ambiental vigente, como lo dispone el Artículo 21:

"Artículo 21. Trámites ambientales. Las personas prestadoras del servicio público de aseo y aquellos que realicen la gestión integral de residuos sólidos deberán obtener los permisos, licencias y demás autorizaciones que requiera, de conformidad con la normatividad ambiental vigente. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá definir, dentro de los seis meses de la expedición de la presente ley, la reglamentación de los requerimientos y trámites ambientales para los proyectos de infraestructura de la actividad de tratamiento de residuos sólidos que impulse la actividad y permita avanzar en el cumplimiento de las metas nacionales."

Al realizar un análisis de las normas antes señaladas, surge la inquietud de si resulta conveniente

residuos de demolición y construcción, así como de definir responsabilidades e instrumentos, incluyendo sanciones por el incumplimiento y la inadecuada disposición de estos residuos en espacios públicos. En la gestión integral de estos residuos se deberán priorizar las actividades de prevención y reducción de la generación, seguida de la alternativa de aprovechamiento y como última opción, la disposición final, siguiendo la jerarquía en la gestión de los residuos, considerando las medidas que aplicarán a los grandes y a los pequeños generadores."

que las CAR actúen como juez y parte; pues deberán estructurar y financiar proyectos sobre los cuales ejercerán sus atribuciones como autoridad ambiental.

3. De las metas nacionales y municipales para la gestión de residuos de construcción y demolición (RCD)

El artículo 57 del proyecto de ley introduce metas nacionales de aprovechamiento de RCD para 2030 y 2040, que incluyen umbrales de entre el 75 % y el 40 % en peso del total de residuos generados, según el tipo de generador y la categoría del municipio. Sin embargo, estas metas no son consistentes con las ya definidas en la Resolución 1257 de 2021, particularmente en su artículo 9, en el cual se establecen metas escalonadas por categorías y plazos. La resolución fue diseñada para permitir un cumplimiento progresivo y adaptado a las realidades locales y sectoriales. La introducción de metas adicionales por parte del proyecto de ley de la referencia, sin contar con un estudio técnico que permita identificar de manera clara la posibilidad de lograr de manera efectiva el % de aprovechamiento establecido; y sin considerar las disposiciones existentes, representa un reproceso en la planeación y ejecución de metas concertadas.

Por otra parte, la experiencia derivada de la implementación de la Resolución 1257 de 2021 ha evidenciado la importancia de incluir los productos de excavación y los sobrantes de adecuación de terrenos dentro de las metas de aprovechamiento de RCD. Estos materiales, debido a su alto volumen y los beneficios ambientales asociados a su gestión, tienen un impacto significativo en la promoción de prácticas de simbiosis industrial. Esta integración es esencial para avanzar hacia un modelo de economía circular en el sector de la construcción y maximizar los beneficios ambientales derivados del aprovechamiento de residuos.

Con base en lo anterior, se considera que la propuesta, presenta riesgos significativos que podrían afectar principios fundamentales como la seguridad jurídica y la confianza legítima, generando retrocesos, incertidumbre y dificultades operativas para los actores del sector. Por ello, respetuosamente solicitamos que, la propuesta se ajuste al marco jurídico vigente aplicable a los RCD, de modo que se logre un marco normativo que garantice la sostenibilidad, la coherencia institucional y un marco normativo estable para el ejercicio de la actividad edificadora

CAMACOL reafirma su disposición para colaborar en el fortalecimiento de esta iniciativa, ofreciendo su conocimiento y experiencia para consolidar un marco regulatorio que promueva el desarrollo urbano responsable y sostenible, en beneficio de la sociedad y el medio ambiente.

Solicitamos respetuosamente que este concepto repose en el expediente del Proyecto de Ley 458 de 2024 Cámara y 021 de 2023 Senado. Agradecemos su atención y quedamos atentos para cualquier aclaración o ampliación requerida.

Cordialmente



GUILLERMO HERRERA CASTAÑO
Presidente Ejecutivo

Signature Certificate

Reference number: RU5GS-AGSPQ-KRRNS-UA902

Signer

GUILLERMO HERRERA

Email: gherrera@camacol.org.co

Sent:

Viewed:

Signed:

Timestamp

21 Nov 2024 20:32:56 UTC

21 Nov 2024 20:38:41 UTC

21 Nov 2024 20:40:16 UTC

Signature



Recipient Verification:

✓ Email verified

21 Nov 2024 20:38:41 UTC

IP address: 181.55.145.192

Location: Bogotá, Colombia

Document completed by all parties on:

21 Nov 2024 20:40:16 UTC

Page 1 of 1



Signed with PandaDoc

PandaDoc is a document workflow and certified eSignature solution trusted by 50,000+ companies worldwide.

